



JUICIO DE AMPARO EN REVI
SION NUMERO 378/1957/2a.
FRANCISCO VAZQUEZ LOZADA.

Vo. Bo.

Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte -
de Justicia de la Nación, celebrado en México, Distrito Fe-
deral, el día doce de junio de mil novecientos cincuenta -
y siete.

VISTOS; Y

RESULTANDO:

Srio. de Estudio
y Cuenta.

PRIMERO.- Mediante escrito fechado el veintiuno
de noviembre de mil novecientos cincuenta y seis, el señor
Francisco Vázquez Lozada ocurrió ante el C. Juez Segundo -
de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal
demandando el amparo de la Justicia Federal contra los ac-
tos de los CC. Tesorero y Sub-Tesorero del Distrito Fede-
ral; de la Dirección General de Impuesto sobre Ingresos --
Mercantiles; de la Oficina de Auditoría de la citada Direc-
ción; del Departamento de Alcoholes; y, del Servicio de --
Inspección del propio Departamento, todas ellas dependien-
tes de la Tesorería del Distrito Federal, que hizo consis-
tir en "las órdenes de visita tanto de la Oficina de Ingre-
sos Mercantiles como del Departamento de Alcoholes, que --
practicaron en el cabaret de mi propiedad denominado [REDACTED] --
[REDACTED], ubicado en [REDACTED] número [REDACTED], letra [REDACTED],
por órdenes recibidas del Tesorero y Sub-Tesorero del Dis-
trito Federal y, como consecuencia de esas visitas, la ar-
bitraria orden de clausura ejecutada en dicho negocio. Es-
tos actos los reclamo de todas la autoridades responsables
ya sea que hayan obrado conjunta o separadamente".

Al efecto, fundó su demanda en las siguientes --
consideraciones de hecho: 1.- Es propietario del cabaret men-
cionado, el cual funciona con la licencia respectiva. 2.- En

contrándose cerrado dicho negocio, durante el transcurso del día se presentaron en él un auditor de la Dirección General del Impuesto sobre Ingresos Mercantiles y un inspector del Servicio de Inspección del Departamento de Alcoholes, ambos dependientes de la Tesorería del Distrito Federal, a practicar una visita domiciliaria, la que entendieron con un mozo que se encontraba haciendo el aseo del establecimiento, el que, como es lógico, desconoce totalmente lo relativo a esta clase de visitas; sin embargo de ello, no se opuso a la práctica de la diligencia respectiva, y si no presentó las llaves a que se refiere el acta levantada al efecto, fué por no tenerlas en su poder. No obstante lo anterior, en forma ilegal y arbitraria clausuraron el citado comercio.

Tramitado el juicio en sus terminos, concluyó con la sentencia que ahora se revisa, en la que se decretó el sobreseimiento del mismo con relación al C. Tesorero del Distrito Federal, en virtud de la inexistencia de los actos que se le atribuyeron; no se decretó el sobreseimiento del propio juicio por haberse desestimado la causales de improcedencia hechas valer por las responsables, y se otorgó el amparo al quejoso. Al efecto, dicha sentencia se apoya en los considerandos que en seguida se transcriben:

"Tercero.-Las responsables solicitan el sobreseimiento del presente juicio, invocando para ello las siguientes causales de improcedencia: La primera consiste, en relación con el Sub-Tesorero del Distrito Federal, en que la orden de visita para el negocio de que se trata, sólo implicó que el inspector comisionado para ello levantara determinadas infracciones, pero no fué como consecuencia de la orden de visita y de la infracción levantada, el que se haya clausurado el Cabaret [REDACTED], ya que la clausu-



55

ra fué realizada por autoridades distintas y por causas diversas. Estudiando esta primera causal de improcedencia, -
- cabe expresar que al principio del informe justificado ren-
- dido conjuntamente por todas las responsables, se confiesa
- por parte del Sub-Tesorero del Distrito Federal que expi-
- dió la orden de visita número 23 para practicarse en el ca-
- baret de que se trata, y esta orden contenida en el oficio
de fecha cinco de noviembre de mil novecientos cincuenta y
seis, que se dirigió al C. Jefe de la Oficina de Auditoría
de la Dirección General del Impuesto sobre Ingresos Mercan-
tiles, del cual acompañó el quejoso copia fotostática, que
no fué objetada en el presente juicio, dispone que en el -
caso de que se compruebe alguna infracción cometida con mo-
tivo de la actividad del giro del Cabaret de que se trata,
se practique el embargo precautorio en los términos del ar-
tículo 90 del Código Fiscal de la Federación y, en su caso,
se clausure el negocio; luego sí se facultó expresamente -
por el Sub-Tesorero del Distrito Federal, al ejecutor de -
la orden de visita para que llevara a cabo la clausura del
negocio o giro de cabaret, por lo que procede concluir que
es infundada la causal de improcedencia que se acaba de es-
tudir. La segunda causal consiste en que los actos reclama-
dos deben estimarse como tácitamente consentidos, ya que
según las responsables, la clausura del giro de cabaret, -
se llevó a cabo el día cinco de noviembre del año en curso,
y la demanda de amparo se presentó hasta el día veintinue-
ve del mismo mes y año, o sea fuera del término que esta-
blece el artículo 21 de la Ley de Amparo. Ahora bien, exa-
minando el acta en que se consigna la clausura de que se -
trata, aparece que esta diligencia no se entendió con el -

dueño del giro, promovente de este amparo, señor Francisco Vázquez Lozada, sino con otra persona, Constantino Borbo--
lla Ruiz, a quien el inspector que levantó el acta conside--
ra como encargado de compras, sin que se exprese por qué --
se cercioró que tiene esa comisión y si es representante --
legal del mismo negocio, por lo que no es aplicable en el
caso la causal de improcedencia que se alega, ya que no --
hay constancia fehaciente alguna de que el quejoso hubiere
tenido conocimiento de la clausura de su negocio el día en
que esta diligencia se llevó a cabo. Este criterio fué sug--
tentado entre otras ejecutorias de la H. Suprema Corte de--
Justicia de la Nación, en la correspondiente al Toca -----
5479/53, dictada el diecinueve de julio de mil novecientos
cincuenta y cuatro, en cuyo considerando segundo se declara
que los actos de autoridad consistentes en órdenes que par--
ticipan de la naturaleza de la orden de que se trata, deben
entenderse directamente con los agraviados. Finalmente, la
causal que se alega en cuarto y quinto lugares del informe
justificado, consiste en que el quejoso debió agotar el me--
dio ordinario de defensa a que se refiere el artículo 160,
fracción IV del Código Fiscal de la Federación, antes de --
acudir a la acción de amparo. Tampoco es aplicable la cau--
sal de improcedencia contenida en la fracción V del artícu--
lo 73 de la Ley de Amparo, porque en la demanda se impugna
como inconstitucional una orden de clausura, dictada según
el quejoso, fuera de las formalidades del procedimiento, --
por lo que es obvio estimar que tal acto no es de los com--
prendidos en la fracción IV del artículo 160 del Código --
Fiscal de la Federación. - - - - -
CUARTO.-Entre los conceptos de violación alegados en la de



76

manda de garantías, se expresa el siguiente: "Se viola el artículo 14 Constitucional por inexacta aplicación de la ley, toda vez que el fundamento que se tuvo para clausurar mi establecimiento fueron los artículos 300 y 305 del Título IV de la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal, y el motivo fué por no presentar las llaves para abrir los estantes y por no facilitar los medios para verificar la inspección, esto en cuanto a la clausura llevada a cabo por el Departamento de Alcoholes y Servicio de Inspección. No hay motivo legal alguno, en primer lugar, porque si no se permitieron las llaves de los estantes, se debió al hecho de que a las doce horas del día en que se practicó la visita, el establecimiento se encontraba cerrado y el dueño no carga en su poder (sic), además porque únicamente está autorizado este giro comercial para operar de las diez de la noche a las seis de la mañana. Por otra parte, existe inexacta aplicación de estos artículos, porque el primero establece que se impondrá una multa cuando se oponga resistencia a la práctica de las visitas de inspección, pero de ninguna manera autoriza la clausura, y el artículo 305 establece clausura provisional de quince días y también multa cuando se opere clandestinamente y, en el caso, el acta no dice nada al respecto, sino el motivo, como ya se dijo, fué la de no presentar las llaves y no facilitar los medios para la inspección, lo que indudablemente no puede tener como consecuencia la clausura de mi establecimiento....".

Quinto.-El concepto de violación transcrito en el considerando anterior es fundado. En efecto, del acta levantada por el inspector comisionado para cumplir con la orden de inspección número 20157 dictada por el C. Jefe del Departamento

mento de Alcoholes de la Tesorería del Distrito Federal, - documento que acompañan las responsables a su informe justificado, no está comprobado que la visita se hubiera entendido con el promovente o su representante, ni tampoco - que la misma persona con quien se entendió la diligencia, - el señor Constantino Borbolla Ruiz, hubiera opuesto alguna resistencia a la práctica de la visita de inspección relativa, por lo que procede concluir que el promovente no incurrió en alguno de los casos de omisión o de oposición -- previstos por las fracciones I y II del artículo 300 de la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal; y, - en consecuencia, es notorio que las responsables aplicaron inexactamente los artículos 300 y 305 del ordenamiento legal que se acaba de invocar, en el acto impugnado por el - quejoso, por lo que las órdenes que se combaten y su ejecución, especialmente la clausura del giro de cabaret perteneciente al quejoso, son actos que violan las formalidades del procedimiento y no están fundados ni motivados en causa legal y, por tanto, son violatorios de los artículos 14 y 16 Constitucionales, debiéndose conceder el amparo y protección de la Justicia Federal que se solicita".

SEGUNDO.-Inconformes con los puntos resolutivos segundo y tercero de dicha sentencia los CC. Sub-Tesorero del Distrito Federal, por sí y como encargado de la Dirección General del Impuesto sobre Ingresos Mercantiles; Jefe de la Oficina de Auditoría de la citada Dirección; Jefe -- del Departamento de Alcoholes; y, Jefe del Servicio de Inspección del mencionado Departamento, todos dependientes de la Tesorería del Distrito Federal, interpusieron en su contra el recurso de revisión correspondiente, el cual se admitió por acuerdo de fecha veinticuatro de enero del año - en curso..



TERCERO.-El Ministerio Público Federal, en pedido de fecha seis de marzo último, opina que debe confirmarse la sentencia recurrida.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Por razones de lógica procede analizar desde luego el tercero de los agravios que proponen a estudio las recurrentes, ya que de estimarse fundado y operante se haría innecesario el estudio de los restantes. Dicho motivo de queja está concebido, en lo conducente, así:

"Tercero.- La sentencia que recurrimos en revisión nos agravia, en nuestro carácter de autoridades responsables, porque contravieniéndose las disposiciones contenidas en los artículos 73, fracción IV y 74, fracción III de la Ley de Amparo, se desechan las cuarta y quinta causales de improcedencia alegadas en el informe justificado rendido conjuntamente por las autoridades señaladas como responsables y se concede el amparo solicitado por Francisco Vázquez Lozada, a pesar de que el quejoso no agotó previamente a la interposición de la demanda de amparo el recurso que establece la fracción IV del artículo 160 del Código Fiscal de la Federación y en contra de las órdenes de clausura del cabaret [REDACTED] realizadas por el Departamento de Alcoholes de la Tesorería del Distrito Federal y por el Departamento de Apremios de la Dirección General del Impuesto sobre Ingresos Mercantiles de la Tesorería del Distrito Federal no obstante que las clausuras ordenadas son de naturaleza esencialmente fiscal.....Lo expuesto, para fundar el desechamiento de la cuarta y quinta causales de improcedencia alegadas en el informe justificado rendido por las autoridades señaladas como responsables, es infundado, en primer lugar, porque en la demanda de amparo no

se reclama como inconstitucionales las órdenes de clausura realizadas por el Departamento de Alcoholes de la Tesorería del Distrito Federal y por el Departamento de Apremios de la Dirección General de Impuesto sobre Ingresos Mercantiles de la propia Tesorería, sino que sólo se alega que las mismas no se ajustan a las disposiciones de los artículos 305 de la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal y 46 de la Ley Federal del Impuesto sobre Ingresos Mercantiles; y, en segundo lugar, porque no basta que los quejosos manifiesten que los actos realizados por las autoridades sean inconstitucionales para que queden relevados de la obligación de agotar recursos ordinarios de defensa".

SEGUNDO.-Esta Sala juzga que el anterior agravio es fundado y operante.

En efecto, no es exacto, como lo afirma el a quo, que la clausura decretada en contra del quejoso no sea un acto de los comprendidos en la fracción IV del artículo 160 del Código Fiscal de la Federación, únicamente, según lo expresa, porque en la demanda de amparo se impugna como inconstitucional la orden respectiva por haberse dictado fuera de las formalidades del procedimiento.

Ante todo, no es verdad que en la demanda de amparo se afirme que la expresada orden de clausura sea inconstitucional por haberse violado formalidades del procedimiento. En el primer concepto de violación que hizo valer el quejoso en su demanda de amparo afirma solamente que las responsables deben respetar su comercio, en los términos del artículo 40. Constitucional, porque el mismo funciona lícitamente y conforme a los Reglamentos respectivos. En el segundo concepto de violación el propio quejoso sos-



tiene que la clausura de que se habla es improcedente, toda vez que la misma se funda en los artículos 300 y 305 de la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal y los motivos por los que se llevó a cabo tal clausura fueron los relativos a no proporcionar las llaves para abrir los estantes y no facilitar los medios para verificar la inspección; que tales motivos son infundados, porque si no se proporcionaron las llaves citadas fué porque el dueño no las carga en su poder y porque el negocio está autorizado a operar únicamente por la noche, que, por otra parte, existe inexacta aplicación de dichos preceptos, porque el primero establece que se impondrá una multa cuando se oponga resistencia a la práctica de las visitas de inspección, pero no autoriza la clausura; el otro precepto establece clausura provisional de quince días y también multa cuando se opere clandestinamente y, en el caso, los inspectores no asientan en el acta relativa nada de eso; por último, afirma el quejoso que la violación del artículo 46, fracciones VII y VIII de la Ley Federal de Impuestos Mercantiles de ninguna manera puede traer como consecuencia la clausura decretada.

Como puede apreciarse de lo anterior, el señor Francisco Vázquez Lozada en ninguna parte de los conceptos de violación que hizo valer reclama que no se hubiera cumplido con las formalidades respectivas del procedimiento y, por el contrario, sólo impugna la clausura en sí, por cuanto en ella se efectúan inexactas aplicaciones de los diversos preceptos legales que invoca.

Además, la circunstancia de que el quejoso estime inconstitucional la repetida orden de clausura, no significa, como lo sostiene el inferior, que contra ella no

pueda operar la causal de improcedencia aducida por las responsables, ya que no existe en materia del juicio de amparo otro medio de enjuiciar los actos reclamados, que impugnándolos de inconstitucionales, por violatorios de las garantías protegidas por nuestra propia Constitución Federal.

A lo anterior debe agregarse que por fundarse la orden de clausura en la Ley Federal del Impuesto sobre Ingresos Mercantiles y en los artículos 300 y 305 de la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal, antes de intentar la acción constitucional, el quejoso debió haber agotado el recurso ordinario respectivo ante el Tribunal Fiscal de la Federación, en los términos de los artículos 160, fracción IV del Código de la Materia y 2o. del Decreto de 29 de diciembre de 1948 que, además de crear el recurso de revisión fiscal de los fallos a que alude, al propio Tribunal le dió competencia para conocer de las inconformidades en contra de las resoluciones definitivas dictadas por las autoridades del mismo Departamento en relación con la hacienda pública local.

Consecuencia de todo lo hasta aquí expuesto es -- que debe revocarse la sentencia recurrida y sobreseerse el presente juicio constitucional.

Por lo expuesto y con apoyo en los artículos 84, - fracción I, inciso b), 86, 89, 90, 91 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve:

PRIMERO.- Se revoca la sentencia recurrida; en consecuencia,

SEGUNDO.- Se sobresee el presente juicio de amparo.

TERCERO.- Notifíquese; con testimonio de esta ejecutoria, devuélvanse al Juzgado de su procedencia los autos originales remitidos y, en su oportunidad, archívese el toca.



29

ASI, por unanimidad de cinco votos, lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siendo relator el C. Ministro Licenciado Felipe Tena Ramírez.-Firman los CC. Presidente y demás Ministros que integran la Sala con el Secretario que autoriza. Doy fe.

PRESIDENTE:

Franco Carreño
Franco Carreño

MINISTROS:

F. Tena
Felipe Tena Ramírez.

Octavio Mendoza
Octavio Mendoza González.

José Rivera
José Rivera Pérez Campos.

Alfonso Francisco
Alfonso Francisco Ramírez.

MINISTROS:

Antonio Rojas
Antonio Rojas Pérez Palacios.

Esta foja corresponde al Toca 378/57, formado en la Sección Segunda Auxiliar, con motivo del juicio de amparo promovido por Francisco Vázquez Lozada.

México, D. F., 12 de junio de 1957.

EL SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA SALA.

Lic. Antonio Rojas
Lic. Antonio Rojas Pérez Palacios.

8- AGO 1958

Por lista de la misma fecha, se notificó la resolución anterior a los interesados y al Ministerio Público Federal.

Alfonso

